Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, México, a veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **03610/INFOEM/AD/RR/2023**, interpuesto por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en lo sucesivo el **Recurrente**; en contra de la falta de respuesta del **Ayuntamiento de Texcoco**, en lo subsecuenteel **Sujeto Obligado**,se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO.** **Del Acceso a Datos Personales.**

Con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el Recurrente presentó a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México **(SARCOEM)** ante el Sujeto Obligado la solicitud de acceso a los datos personales registrada bajo el número de expediente **00002/TEXCOCO/AD/2023**,mediante la cual requirió le fuese entregado lo siguiente:

“LABORE EN EL AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO, MÉXICO DEL AÑO 1991 AL 1992 CON LA CATEGORÍA DE JEFE DE EVENTOS ESPECIALES Y OTRAS, POR TANTO SOLICITO EN COPIAS CERTIFICADAS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MI NOMBRAMIENTO, MIS RECIBOS DENÓMINA, LAS NÓMINAS MÍAS DE LOS MESES DE ENERO, JULIO Y DICIEMBRE DE CADA AÑO LABORADO, MIS MOVIMIENTOS DE ALTA Y BAJA PRESENTADOS ANTE ISSEMYM, MI NÚMERO DE EMPLEADO, MI RFC, MI REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES, MI CATEGORÍA Y SUELDO QUE TUVE DURANTE EL PERÍODO LABORADO AHÍ Y UN OFICIO QUE CERTIFIQUE TODOS ESTOS DATOS .ADJUNTO ARCHIVO CON 8 RECIBOS DE MI NOMINA Y MI CREDENCIAL DE ELECTOR.” (Sic)

Modalidad de entrega: **Copias certificadas**

El Recurrente adjuntó a su solicitud el documento denominado **“Adobe Scan 25 de may de 2023 (1).pdf”**, que consiste en la credencial de elector con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor del Recurrente y de ocho recibos de nómina expedidos por el Sujeto Obligado en la segunda quincena de febrero, primera y segunda quincenas de marzo, primera y segunda quincenas de abril, primera quince de mayo, primera quincena de junio y primera quincena de julio, todos de mil novecientos noventa y uno.

**SEGUNDO. De la falta de respuesta del Sujeto Obligado.**

En el expediente electrónico se observa que el Sujeto Obligado omitió dar respuesta a la solicitud de acceso a datos personales. Derivado de lo anterior, se constituye la figura de la ***Negativa Ficta***, cuya esencia consiste en atribuir un efecto negativo de la autoridad administrativa frente a las instancias y solicitudes que hagan los particulares.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

En fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el Recurrente interpuso el presente recurso de revisión, el cual fue registradoen el SARCOEM con el expediente número **03610/INFOEM/AD/RR/2023**, manifestando lo siguiente:

**Acto Impugnado:**

“La omisión de dar respuesta a mi solicitud personal con apego a derecho mediante esta plataforma Sarcoem al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.” (Sic)

**Razones o Motivos de Inconformidad**:

“COMO SE DEMUESTRA FEHACIENTE E IDÓNEAMENTE TRABAJE EN ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA FECHAS INDICADAS EN LAS DOCUMENTALES PUBLICAS QUE ANEXÉ PARA COADYUVAR A LA BÚSQUEDA DE MI EXPEDIENTE Y CON ELLO, QUE SE ME EXPIDAN A MI COSTA COPIAS CERTIFICADAS DE LOS TALONES DE NÓMINA, NOMINAS, NÚMERO DE EMPLEADO, RFC., CATEGORIA Y SUELDO, PERIODO LABORAL Y A PESAR DE QUE ENVIÉ UN PDF EL AYUNTAMIENTO VIOLENTA GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN MI DERECHO TALES COMO LOS ARTÍCULOS 1 PÁRRAFO TERCERO, OCTAVO, Y DEMÁS APLICABLE A ESTE ASUNTO, MÁS EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO Y DEMAS APLICABLES RAZÓN POR LA CUAL PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN PARA QUE SE INVESIGUE Y SE PROTEJA MI DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SE ME EXPIDAN LAS COPIAS ANTES SOLICITADAS. ANEXO ARCHIVO. ASÍ TAMBIÉN SE ME EXPIDA UN OFICIO EN EL QUE SE CERTIFIQUEN TOS ESTOS DATOS YA TIENE COMO FINALIDAD QUE EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ME EXPIDA MI HOHA DE SERVICIO.” (Sic)

Como anexo al medio de impugnación se adjuntó el documento denominado **“Adobe Scan 22 de jun de 2023.pdf”**, consistente en los recibos de pago emitidos en la segunda quincena de febrero, primera y segunda quincenas de marzo, primera y segunda quincenas de abril, primera quincena de mayo, primera quincena de junio, primera y segunda quincenas de julio, todos de mil novecientos noventa y uno; el acuse de la solicitud de acceso a datos; captura de pantalla de perfil en SARCOEM del perfil del solicitante y la manifestación de bienes por alta o baja en el servicio suscrita por el hoy Recurrente el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno.

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

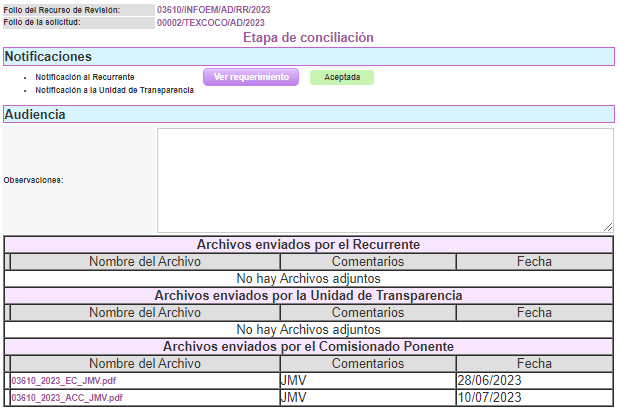
En fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, el recurso de revisión de mérito se registró en el SARCOEM y fue turnado al **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, a efecto de que decretara su admisión o desechamiento, ello en términos de los artículos 11 y 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, con relación al diverso 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria a la citada Ley de Protección de Datos Personales por disposición de su artículo 11.

**QUINTO. De la Admisión del recurso de revisión.**

En fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 127 y 131, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y el artículo 185, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria, se admitió el presente recurso de revisión a través del acuerdo de admisión respectivo.

**SEXTO. De la exhortación a conciliar.**

El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo para exhortar a las partes a una conciliación. Al respecto, únicamente el Recurrente accedió a la conciliación; por su parte, el Sujeto Obligado no emitió pronunciamiento alguno respecto de su voluntad de conciliar como se observa en la siguiente imagen:



Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, el día diez de julio de dos mil veintitrés se tuvo por precluido el periodo para aceptar la conciliación iniciando así la etapa de instrucción.

**SÉPTIMO. De la etapa de instrucción.**

Una vez abierta la etapa de manifestaciones, se advierte que el Sujeto Obligado omitió rendir su Informe Justificado; asimismo, en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés, el Recurrente emitió manifestaciones mediante el documento denominado **“Adobe Scan 14 de ju de 2023.pdf”**, mediante el cual manifestó que no advierte la razón por la cual el Sujeto Obligado ha omitido proporcionar la información solicitada y que haga caso omiso a la plataforma al no contestar en ningún sentido expresamente, violentado el Estado de derecho, el derecho de petición y las leyes que norman y lo obligan a contestar.

**OCTAVO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, se decretó el cierre de instrucción en fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria, iniciándose el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**NOVENO. De la ampliación del término para resolver.**

En fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 133, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, por un plazo de veinte días hábiles.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia.**

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero; concatenado con los artículos 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128 y 129, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; 1, 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, párrafo tercero, 185 y 194, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria de la citada Ley de Protección de Datos en términos de su artículo 11; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es menester señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios en sus artículos 127, 129, así como en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, supletoria en materia de acceso a datos personales, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Estudio de improcedencia y sobreseimiento.**

Este Instituto, previo al análisis de fondo del presente asunto, realizará el estudio preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, en lo que corresponde a las causales de improcedencia, el artículo 112 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados, indica las siguientes:

***Artículo 112.*** *El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:*

*I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 103 de la presente Ley;*

*II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último;*

*III. El Instituto o, en su caso, los Organismos garantes hayan resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del mismo;*

*IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 104 de la presente Ley;*

*V. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda;*

*VI. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos, o*

*VII. El recurrente no acredite interés jurídico.*

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, a la fecha que se resuelve no se actualizan las causales de improcedencia; ya que la Recurrente presentó su recurso dentro del término de quince días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento de que el Instituto o, en su caso, los Organismos garantes hayan resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del mismo; se actualizó la causal de procedencia establecida en la fracción II, del artículo 103, de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados: no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por la Recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto o los Organismos garantes, el particular no amplió su solicitud a través de su medio de impugnación y no fue necesario que el Recurrente acreditara su interés jurídico, ya que es la titular de los datos personales solicitados.

Por otra parte, el artículo 113, de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados, consagra lo relativo al sobreseimiento, en los términos siguientes:

***Artículo 113.*** *El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando:*

*I. El recurrente se desista expresamente;*

*II. El recurrente fallezca;*

*III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley;*

*IV. El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o*

*V. Quede sin materia el recurso de revisión*

Del análisis realizado por este Instituto, no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento mencionadas; ya que la Recurrente no se ha desistido del recurso, no existe constancia que permita inferir que el particular haya fallecido; asimismo, no se advierte que el recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia establecida en el artículo 112, de la Ley citada, asimismo el responsable no modificó su respuesta de tal manera que haya dejado sin materia el presente recurso de revisión ni que se haya quedado sin materia por alguna otra circunstancia, siendo oportuno entrar al estudio de fondo del presente asunto.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto.**

Antes del entrar al estudio, cabe precisar que el Sujeto Obligado no realizó pronunciamiento alguno, pues no se debe perder de vista que el objeto del presente fallo nace a la vida jurídica en el momento en el que el particular reviste la figura de Recurrente interponiendo dicho medio de impugnación, el cual tiene como motivo de inconformidad la omisión de la autoridad en dar respuesta a su solicitud, en consecuencia se actualizan las hipótesis, señaladas en las fracciones VII y XI del artículo 129 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, resultando procedente la interposición del recurso de revisión cuando no se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

Así las cosas, ante la omisión del Sujeto Obligado para dar respuesta al Recurrente, se advierte lo que en la doctrina se le conoce como **negativa ficta**, figura jurídica cuya esencia consiste en atribuir un efecto negativo al silencio de la autoridad administrativa frente a las instancias y solicitudes que hagan los particulares.

En este sentido la negativa ficta constituye una presunción legal, en el entendido de que donde no hubo respuesta por parte del Sujeto Obligadoexiste, una resolución de rechazo ante la solicitud del ciudadano; ya que efectivamente, dicha figura se encuentra íntimamente vinculada con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, consagrados en nuestra Carta Magna, es por ello que constituye un instrumento que garantiza la posibilidad de defensa del particular en contra de la incertidumbre jurídica y que tiende a realizar ese Estado de Derecho en el que, el particular, tiene siempre una vía de defensa.

En este sentido en el marco del derecho de acceso a la información pública, la figura de la negativa ficta brinda al ciudadano la oportunidad de inconformarse en los casos en que estime violentado su derecho; en consecuencia, resulta indispensable subrayar que el derecho de acceso a los datos personales implica que los titulares puedan acceder, solicitar y ser informados sobre sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, como se establece en el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos estatal, que a la letra estipula lo siguiente:

**Artículo 98. El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión de los sujetos obligados**, así como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los términos previstos en la Ley.

El responsable debe responder al ejercicio del derecho de acceso, tenga o no datos de carácter personal del interesado en su sistema de datos.

Así que la obligación de los Sujetos Obligados de dar acceso a la solicitud de los particulares se tendrá por cumplida cuando se le haga entrega de los documentos solicitados, de acuerdo a lo señalado por el artículo 118 de la Ley local en la materia, que se reproduce de la siguiente forma:

**Artículo 118.** Las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO se darán por cumplidas a través de expedición de copias simples, copias certificadas, documentos en la modalidad que se hubiese solicitado, previa acreditación de la identidad y personalidad del solicitante o en su caso, ante la notificación de improcedencia de su solicitud.

Cuando se determine la procedencia del ejercicio de dichos derechos y éstos se encuentren a disposición del titular en la modalidad que haya escogido previa acreditación, la solicitud se entenderá atendida si el solicitante no acude dentro de los sesenta días posteriores a la notificación.

De lo anterior, conforme a las acciones del Sujeto Obligado, se establece que éste vulnera el derecho de acceso a la información pública del Recurrente, toda vez que no se dio respuesta a la solicitud del hoy Recurrente.

En este punto, es toral recordar que el hoy Recurrente, haciendo alusión a que trabajó en el Ayuntamiento de Texcoco como Jefe de Eventos Especiales del año 1991 a 1992, por lo que solicitó que se le entregaran copias certificadas de su nombramiento, recibos de nómina, la nómina de los meses de enero, julio y diciembre de los años laborados, los movimientos de alta y baja presentados ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, número de empleado, Registro Federal de Contribuyente, la categoría y sueldo que tuvo mientas laboró y un oficio que certifique dichos documentos.

Ante la solicitud de información, el Sujeto Obligado omitió atender la solicitud; por lo que el Recurrente interpuso su medio de impugnación señalando como acto impugnado la omisión de dar respuesta a la solicitud y dando como razones o motivos de inconformidad que se demostró fehacientemente que trabajó para el Ayuntamiento de Texcoco en las fechas referidas, por lo que se reitera la solicitud, señalando que el Sujeto Obligado violentó sus garantías constitucionales.

Se debe resaltar que este Instituto exhortó a las partes para que se llegara a una conciliación; sin embargo, el Sujeto Obligado no atendió dicho llamado. Asimismo, durante la etapa de instrucción, el Sujeto Obligado omitió rendir su Informe Justificado.

Por su parte, el Recurrente emitió manifestaciones mediante el documento denominado **“Adobe Scan 14 de ju de 2023.pdf”**, mediante el cual expresó que no advierte la razón por la cual el Sujeto Obligado ha omitido proporcionar la información solicitada y que haga caso omiso a la plataforma al no contestar en ningún sentido expresamente, violentado el Estado de derecho, el derecho de petición y las leyes que norman y lo obligan a contestar.

En esa tesitura, se tiene que el presente recurso de revisión es procedente; toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 129 de la Ley de la materia, que a la letra dice:

**Artículo 129.** El recurso de revisión procederá en los supuestos siguientes:

(…)

**VII.** No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

(…)

El precepto legal citado, establece como supuestos de procedencia del recurso de revisión, en aquellos casos en que no se dé respuesta a lo solicitado por los particulares y en el presente asunto, el Sujeto Obligado omitió dar, tanto trámite como respuesta a lo requerido por el ahora Recurrente.

Una vez determinada la vía sobre la que versará el presente asunto y previa revisión del expediente electrónico formado en la plataforma SARCOEM**,** por motivo de la solicitud de acceso a datos personales y del recurso de revisión al que dio origen, se observa que el Sujeto Obligado**,** no dio respuesta a la solicitud de información planteada por el particular, lo que se traduce como la configuración de la negativa ficta.

Bajo ese contexto, este Instituto analizó la totalidad de constancias que integran el expediente electrónico del SARCOEM y observó que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente devienen fundados, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de Derecho:

En este sentido, es pertinente enfatizar lo que, respecto al derecho de acceso a la información pública, refiere el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente señala:

**Artículo 6o.** (…)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

(…)

II. **La información que se refiere a** la vida privada **y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes**.

III. **Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización**, **tendrá acceso** gratuito a la información pública, **a sus datos personales o a la rectificación de éstos**.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

**V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles**, **la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos** y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

(…)

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y **a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley**.

(…)

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 5°, dispone en su parte conducente, lo siguiente:

***Artículo 5.*** *(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado****. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I. Toda la información en posesión de*** *cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de* ***la administración pública municipal y sus organismos descentralizados****, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II.*** *La información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas será protegida a través de un marco jurídico rígido de tratamiento y manejo de datos personales, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.*

***III.******Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos****.*

*IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución.*

*V. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales, así como los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos, a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley reglamentaria y el organismo autónomo garante en el ámbito de su competencia. Las resoluciones que correspondan a estos procedimientos se sistematizarán para favorecer su consulta.*

*VI. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos.*

*VII. La ley reglamentaria, determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o jurídicas colectivas*.

Es así como, conforme a los preceptos legales citados, se desprende que el derecho de acceso a los datos personales es un derecho individual que puede ser ejercido ante cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo, tanto federales, como estatales, de la Ciudad de México o Municipales.

En ese tenor, este Instituto no omite señalar que los Sujetos Obligados deben contar con un área responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia; asimismo, deben designar a un responsable para atender dicha Unidad, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes.

Dicho lo anterior, se precisa que la ya mencionada Unidad de Transparencia, conforme a lo establecido en el artículo 90 fracciones I, II y III de la Ley de Protección de Datos local, es la encargada de auxiliar y orientar al titular de los datos con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y establecer mecanismo para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados.

Asimismo, se destaca que de conformidad con el artículo 108 de la legislación en cita, se desprende que los responsables deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, privilegiando los mecanismos que faciliten su ejercicio de una manera breve y ágil. El plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud., tendiendo como excepción al plazo referido, una prórroga de por diez días, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.

En mérito de lo expuesto, es claro que en este caso en particular la Unidad de Transparencia incumplió la normativa en la materia, puesto que no se entregó ninguna respuesta al solicitante, vulnerando así su derecho de acceso a sus datos personales. Por ello, esta Autoridad como órgano garante del ejercicio de los derechos ARCO estima que lo procedente es ordenar al Sujeto Obligado dé tramité y respuesta a la solicitud del particular

Asimismo, el último párrafo del artículo 108 establece que en los casos en los que el responsable no emita respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO se entenderá que la respuesta es negativa. Por tanto, en concatenación con lo dispuesto en el artículo 172, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria en materia de protección de datos y en el que estipula que los argumentos para justificar cualquier negativa de acceso a la información deben recaer en el Sujeto Obligado, por lo que, en caso de no atender de manera positiva[[1]](#footnote-1), el requerimiento de información deberá manifestarse al respecto.

Ahora bien, en atención al sentido en que se resuelve el presente medio de impugnación, este Instituto no omite señalar que en caso de que la información solicitada debiera obrar en sus archivos y no cuente con ella, deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia, en donde conste la declaratoria de inexistencia de la misma, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Protección de Datos Personales estatal.

En tal caso, la declaratoria a que se ha hecho referencia deberá realizarse, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 fracciones III y VIII, 113 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipio; 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria; preceptos que establecen la forma en que los sujetos obligados deben dar curso a las declaratorias de inexistencia.

Resulta aplicable el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0008-19 emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

**INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. SUPUESTOS PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DE LA.** De conformidad con los artículos 19, párrafo tercero y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Comité de Transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia de información debidamente fundado y motivado, para justificar por qué no obra en los archivos del Sujeto Obligado la información que deriva de las facultades, competencias y atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan, la cual debió generar, poseer y administrar. Por tanto, en términos de los numerales previamente citados, el referido acuerdo de inexistencia procede en los siguientes momentos: a) cuando no se generó, poseyó o administró el documento teniendo la obligación conforme a la presunción legal que deriva de las facultades, competencias y atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan; b) que habiendo sido generada, poseída o administrada, por algún motivo ya no se cuenta con la información solicitada; o bien, c) cuando el Sujeto Obligado fue omiso en ejercer una facultad, competencia o atribución inexcusable. Supuestos que, de actualizarse, deberán acreditarse con las exigencias legales contempladas en los numerales 49, fracción II, 169 y 170 de la Ley de Transparencia de la entidad, a través de una resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado que confirme la inexistencia de la información, acto jurídico que genera certeza jurídica al particular de que se realizó un criterio de búsqueda exhaustivo y razonable con la debida justificación de la falta de información y en su caso, las consecuencias de ello.

En mérito de todo lo expuesto, ante lo **fundado** de las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, este Instituto estima que lo dable es ordenar al Sujeto Obligado dé trámite y respuesta a la solicitud de acceso a datos personales la información, atendiendo lo señalado en el presente Considerando.

Por último, es necesario señalar que el recurso de revisión previsto en la Ley de Protección de Datos local no es la vía idónea para investigar y sancionar a servidores públicos con motivo de la falta de respuesta a solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO; no obstante, ante la vulneración del derecho de acceso a datos personales y de conformidad con las razones o motivos de inconformidad expuestos al momento de interponer este medio de impugnación, resulta procedente dar vista a la Secretaría Técnica del Pleno, para que en el ejercicio de las competencias reservadas integre y remita al Órgano de Control Interno competente, un expediente formado con motivo de las presuntas infracciones de carácter omisivo cometidas en detrimento al derecho del ejercicio de los derechos ARCO.

En efecto, la Secretaría Técnica del Pleno hará del conocimiento del órgano interno de control competente de las infracciones en que el Sujeto Obligado incurrió, toda vez que la naturaleza de investigar y sancionar corresponde a un ente distinto a éste a través de un procedimiento diferente al recurso de revisión, lo cual se encuentra previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, específicamente en sus artículos 137 último párrafo y 165, que señalan lo siguiente:

***Artículo 137.*** *(…)*

*Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente del responsable para que ésta inicie, en su caso, el Procedimiento de Responsabilidad respectivo.*

***Artículo 165.*** *Serán causas de responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes::*

***I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, así como los demás derechos previstos por esta Ley.***

*(…)*

***XXI. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho que se trate.***

*(…)*

De manera complementaria a lo anterior, es conveniente señalar que la fracción XXVII, del artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dispone lo siguiente:

***Artículo 19.*** *Corresponde a la Secretaría Técnica del Pleno ejercer las atribuciones siguientes:*

*(…)*

***XXVII.*** *Remitir al Órgano Interno de Control de los Sujetos Obligados o, en su caso, a la autoridad que corresponda, el expediente que contenga las presuntas infracciones cometidas en el marco de la Ley de Transparencia, para la promoción de responsabilidades y sanciones, así como dar seguimiento al resultado de los procedimientos instaurados;*

*(…)*

Por lo que procedente dar vista a la Secretaría Técnica del Pleno a efecto de que ejerza las atribuciones previstas en la normatividad aplicable y comunique al Órgano Interno de Control de este Instituto para que éste último en ejercicio de sus atribuciones atienda las directivas marcadas en la propia Ley de la materia, con fundamento en su artículo 137, el cual estipula que cuando este Órgano Garante determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de la instancia competente para que éste inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo, cuyo resultado deberá de ser informado al Instituto.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 2 fracción II, 11, 81, 82 fracciones I y III, 127, 128, 129, 133 y 137 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México; 185 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria en materia del ejercicios de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente**,** en términos del **Considerando CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Sujeto Obligado queatienda la solicitud de acceso a datos personales **00002/TEXCOCO/AD/2023** en términos del **Considerando CUARTO** de esta resolución; vía Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales en el Estado de México (SARCOEM).

**TERCERO. Notifíquese**la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado para que en los términos previstos en el artículo 137, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; con relación en los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria por disposición del artículo 11 de la citada Ley de Datos, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución.; y se le apercibe que, en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 154 y 155 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios

**CUARTO. Notifíquese** al Recurrente la presente resolución por medio del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales en el Estado de México (SARCOEM) y hágase de su conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios..

**QUINTO. Gírese** oficio a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto para hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control competente la presente resolución, a fin de que de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se determine lo conducente, en términos de lo señalado en el **Considerando CUARTO** de la presente resolución.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA (CON AUSENCIA JUSTIFICADA), SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA (CON AUSENCIA JUSTIFICADA), EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/fzh

1. Al encontrarse en algún supuesto restrictivo, previsto en la normatividad aplicable. [↑](#footnote-ref-1)